

**Reclamación nº 35/2021**

**Acuerdo de 28 de enero de 2021, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales en el contrato de “Suministro de 305 engrasadores de carril eléctricos, repuestos y consumibles”, número de expediente 6012000134, de Metro de Madrid.**

Con fecha 20 de enero de 2021, se ha recibido en este Tribunal escrito de interposición de reclamación en materia de contratación de la representación de la empresa HY-Power Produktions Und Handels GMBH, contra su exclusión del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de referencia, por “*no presentar el contenido mínimo exigido*” en la Memoria técnica. La reclamante considera suficiente la Memoria técnica presentada y, en consecuencia, solicita su readmisión con retroacción del procedimiento de contratación al momento inmediatamente anterior al acuerdo de exclusión, o en su defecto retroacción del procedimiento al momento anterior a la exclusión de la empresa, para que la entidad contratante le requiera subsanación de la Memoria técnica presentada. En consecuencia, solicita la suspensión del procedimiento de contratación en tanto no se resuelva la presente reclamación.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite. El citado artículo es aplicable a la presente reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 121.1 del Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero de



medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (en adelante RDLCSE), al establecer que a las reclamaciones que se interpongan ante los órganos de recursos contractuales regulados en la LCSP les serán de aplicación las disposiciones de la citada ley que regulan el recurso especial en materia de contratación, incluido el artículo 49 relativo a la adopción de medidas cautelares.

Remitida al órgano de contratación solicitud de envío a este Tribunal del expediente y del preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la LCSP, sin que hasta la fecha se haya remitido, compete a este Tribunal decidir sobre la medida cautelar sin contar con el pronunciamiento de la entidad contratante.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz



la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente caso, la actuación que se impugna es un acto de trámite cualificado previsto en el artículo 119.2.b) del RDLCSE, por lo que ante lo avanzado de la tramitación del procedimiento de adjudicación y la posibilidad de que la resolución que adopte el Tribunal pueda suponer la retroacción de actuaciones, se considera procedente suspender el procedimiento de contratación hasta la resolución de la reclamación.

La reclamación en materia de contratación al igual que el recurso especial tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.



De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso, sin que haya quedado acreditado que la suspensión suponga perjuicio para los intereses generales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

### **ACUERDA**

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de “Suministro de 305 engrasadores de carril eléctricos, repuestos y consumibles”, número de expediente 6012000134, de Metro de Madrid, hasta que se resuelva la reclamación y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

**EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL**

Por sustitución, conforme artículos 3.7 de la Ley 9/2010, 19.2 LRJAP y 5 RPERMC  
**LA VOCAL DEL TRIBUNAL**

